

SES

Superintendencia de
Educación Superior

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ORD.: 000584

ANT.: Oficio Ord. N° 6379, de 26 de mayo de 2023.

MAT.: Sobre la compatibilidad de los requisitos dispuestos en el literal v de la letra b) del inciso primero del artículo 27 bis de la ley 20.129 y en el literal iv del inciso segundo del artículo trigésimo sexto transitorio de la ley 20.903, con el dictamen 20.264 de 2018 de la Contraloría General de la República.

SANTIAGO,

05 JUL 2023

DE: JOSÉ MIGUEL SALAZAR ZEGERS
SUPERINTENDENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR

A: VÍCTOR ORELLANA CALDERÓN
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Junto con saludar, me dirijo a usted en respuesta al oficio del antecedente, en el que solicitó a esta Superintendencia un pronunciamiento con el objeto de determinar la manera de conciliar la admisión de estudiantes con discapacidad determinada por el Dictamen N° 20.264 de 2018 de la Contraloría General de la República, con los requisitos para admitir y matricular estudiantes con discapacidad en tales carreras y programas regulares de acuerdo con lo establecido en el literal v de la letra b) del inciso primero del artículo 27 bis de la ley 20.129 y del literal iv del inciso segundo del artículo trigésimo sexto transitorio de la ley 20.903. Lo anterior, considerando que actualmente existen programas de admisión especial para personas que tienen algún tipo de discapacidad, en el contexto del precitado dictamen de Contraloría.

Sobre lo planteado, cumplo con señalar lo siguiente:

I. Planteamiento del problema

La letra b) del inciso primero del artículo 27 bis de la ley 20.129 dispone que, para obtener la acreditación o la autorización del Consejo Nacional de Educación, según corresponda, las universidades sólo podrán admitir y matricular en las carreras y programas regulares de pedagogía a alumnos que cumplan al menos con alguna de las condiciones allí establecidas. Recientemente, la ley 21.490 incorporó una nueva condición a este artículo, agregando un literal v, que exige "[H]aber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocido por el Ministerio de Educación, y encontrarse inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, establecido en el Título V de la ley N° 20.422. En este caso no será necesario haber rendido la prueba de acceso a la educación superior o el instrumento que la reemplace".

Por otra parte, el inciso primero del artículo trigésimo sexto transitorio de la ley 20.903 regula el régimen transitorio de los requisitos de la letra b) del artículo 27 bis de la ley 20.129 señalando que éstos entrarán en vigencia desde el proceso de admisión universitaria y matrícula del 2024. Luego, en su inciso segundo, dispone que para el proceso de admisión y matrícula del 2023 al 2025, en las carreras y programas de pedagogía implementados con anterioridad al año 2019 que cuenten con una acreditación mínima de tres años y en los programas de prosecución de estudios de pedagogía que cuenten con una acreditación mínima de dos años, deberá cumplirse con las condiciones que menciona la norma. Esta disposición transitoria también fue recientemente modificada por la ley 21.490, que incorporó al inciso segundo el siguiente literal iv: “[H]aber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocido por el Ministerio de Educación, y encontrarse inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, establecido en el Título V de la ley N° 20.422. En este caso no será necesario haber rendido la prueba de acceso a la educación superior o el instrumento que la reemplace”.

No obstante, la Contraloría General de la República en su dictamen 20.264 de 2018 estableció que los requisitos para admitir y matricular estudiantes en carreras y programas de pedagogía son conciliables con la implementación de sistemas de admisión especial para estudiantes con discapacidad. Si bien esta interpretación fue realizada con anterioridad a la ley 21.490, cabe determinar si sus fundamentos o razonamientos continúan vigentes.

II. Revisión de la discusión legislativa

En la historia fidedigna de la ley 21.490 consta que la incorporación del literal iv del inciso segundo del artículo trigésimo sexto transitorio se originó por una indicación del Ejecutivo, que buscaba reconocer una cuarta vía de acceso a las carreras de pedagogía. Esto, permite el ingreso alumnos que además de encontrarse inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, hubieran efectuado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior (PAP) reconocido por la cartera del ramo, sin necesidad de rendir la prueba de acceso a la educación superior.

En este sentido, durante la tramitación en la Comisión de Educación del Senado, la Subsecretaria de Educación Superior de la época señaló que esta enmienda permite que las instituciones admitan y matriculen a personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad que realicen y aprueben un programa PAP, el cual sido una vía de acceso promovida por distintos actores. Sin embargo, precisó que resulta complejo disminuir los requisitos para estudiar pedagogías, y que esta norma estaría eximiendo a las personas con discapacidad de rendir la prueba de acceso a la educación superior, siempre que hayan aprobado un programa PAP.

Adicionalmente, la Subsecretaria afirmó que la indicación responde a las propuestas planteadas por el Consejo de Decanos de las Facultades de Educación del Consejo Nacional de Rectores (CONFAUCE) y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). Esta última institución, basada en una presentación realizada ante la Contraloría General de la República que dio origen al dictamen N° 20.264 de 2018, previno que respecto de postulantes impedidos de poder rendir la PSU por razones de discapacidad, tales como ceguera, se

encuentran, a priori, excluidos de poder ingresar a estudiar carreras de pedagogía, lo que podría constituir una forma de discriminación arbitraria, contraria a los principios de igualdad de oportunidades, inclusión social y accesibilidad consagradas en nuestra legislación. Precisa que esta situación podría eventualmente configurar una vulneración de garantías fundamentales tales como el derecho a la educación, consagrado en el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, la Subsecretaría reforzó la importancia de incorporar esta nueva vía de acceso vinculada a los programas PAP, porque están sujetos a rigurosas exigencias, están sometidos al monitoreo de la Subsecretaría de Educación y son examinados por un Comité de Evaluación. Así, concluyó que la ventaja de dicha medida es que los programas PAP tienen exigencias que ya están reguladas y se encuentran en funcionamiento hace años bajo la supervisión del Ministerio de Educación.

A partir de lo expuesto se colige que, desde un punto de vista histórico, la finalidad de incorporar el literal iv del inciso segundo del artículo trigésimo sexto transitorio es que las instituciones admitan y matriculen a personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad que realicen y aprueben un programa PAP, porque tienen rigurosas exigencias, están sometidos al monitoreo de la Subsecretaría de Educación y son examinados por un Comité de Evaluación. Esto, además, porque no estaban contemplados expresamente en la regulación legal de los requisitos de acceso a las carreras de pedagogía, y porque no incluir a estas personas podría implicar una vulneración del derecho fundamental a la educación, en los términos del dictamen de Contraloría General ya mencionado.

III. Revisión de la normativa internacional y legal aplicable al caso

En el plano internacional, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, promulgada por decreto 99 de 2002, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en su artículo 3 N° 1 establece que *"los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y administración"*.

Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, promulgada por decreto 201, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, establece en su artículo 24 N° 1 que los *"Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, y con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida"*. Luego, el punto 2 letra a) del mismo artículo establece que al hacer efectivo este derecho, *"los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad"*.

En relación con lo anterior, la legislación chilena ha desarrollado estas obligaciones estatales reconociendo el derecho a la educación de las personas con discapacidad y proscribiendo cualquier forma de discriminación a su respecto. En este sentido, el artículo 24 de la ley 20.422 dispone que *"toda persona o institución, pública o privada, que ofrezca servicios educativos, capacitación o empleo, exigiendo la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y prácticas de selección en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos. Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la aplicación de los instrumentos de selección que administren para el efecto, deberán informarlo en su postulación, para su adaptación"*.

Del mismo modo, el artículo 36 inciso tercero de la ley establece que *"el Ministerio de Educación deberá hacer las adecuaciones necesarias para que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan participar en las mediciones de la calidad de la educación"*. A su turno, el artículo 42 prescribe que *"los establecimientos educativos deberán, progresivamente, adoptar medidas para promover el respeto por las diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial, sean sordas, ciegas o sordo-ciegas en la educación básica, media y superior, con el fin de que éstos puedan tener acceso, permanencia y progreso en el sistema educativo"*.

En materia de educación superior, la ley 21.091 establece que el Sistema de Educación Superior se inspira, entre otros, en el principio de inclusión que tiene por objeto promover la inclusión de los estudiantes en las instituciones de educación superior, velando por la eliminación y prohibición de todas las formas de discriminación arbitraria; así como también promover la realización de ajustes razonables para permitir la inclusión de las personas con discapacidad. Por su parte, en el caso de las universidades estatales, el artículo 7 de la ley 21.094 reconoce el derecho a la educación superior en conformidad a lo dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, dentro de los cuales está la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. La misma disposición mandata que, para efectos de lo anterior, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para proveer el ejercicio de este derecho a través de sus instituciones de educación superior, las que deberán garantizar sistemas de acceso sobre la base de criterios objetivos fundados en la capacidad y mérito de los estudiantes, sin importar su situación socioeconómica, y fomentar mecanismos de ingreso especiales de acuerdo a los principios de equidad e inclusión.

Por su parte, la Resolución Exenta N° 5250 de 2022, del Ministerio de Educación, en el punto 4.2 define la vía de admisión habilitación pedagogías como aquella relacionada con estudiantes que cumplen los requisitos establecidos por el artículo trigésimo sexto transitorio de la ley 20.903 para cursar carreras de pedagogía, pero que no cumplen necesariamente con los requisitos adicionales dispuestos por la universidad para su matrícula en esas carreras por vía de admisión especial. Con todo, el inciso tercero de dicha norma establece que *"En el caso de las carreras de pedagogía, la admisión especial estará reservada para aquellos estudiantes en situación de discapacidad que cumplan con los requisitos consignados en el Dictamen N° 20.264 de 10 de agosto de 2018 de la Contraloría General de la República"*.

IV. Conclusión del caso

En el escenario anteriormente descrito, el deber de implementar un sistema de ingreso especial para personas con discapacidad es compatible con los requisitos del artículo 27 bis de la ley 20.129 y con el artículo trigésimo sexto transitorio de la ley 20.903, puesto que en el contexto de acreditación de las carreras y programas de pedagogía, el Estado debe respetar y promover el derecho a la educación de las personas con discapacidad, eliminando toda clase de discriminación arbitraria por parte de las instituciones en los procesos de admisión y matrícula.

Así, una interpretación sistemática de las normas pertinentes permite concluir que el requisito adicional de haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior (PAP) debe entenderse sin perjuicio de los demás sistemas de ingreso especial para las personas con discapacidad, ya que éstos no forman parte del sistema de admisión regular. De lo contrario, so pretexto de la acreditación de las carreras y programas de pedagogía, las instituciones podrían dejar de aceptar postulantes con discapacidad por no haber realizado y aprobado un programa de acceso para estudios de pedagogía, pese a que mantienen sistemas de ingreso especial que, al amparo de la legislación anterior, eran considerados suficientes para determinar que los postulantes cuentan con la vocación y aptitudes para el ejercicio de la docencia, a fin de dar cumplimiento al objetivo primordial de la normativa sobre aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Por lo tanto, cabe concluir que la admisión de estudiantes con discapacidad determinada por el dictamen 20.264 de 2018 de la Contraloría General de la República, es compatible con los requisitos para admitir y matricular a dichos estudiantes, establecidos en el literal v de la letra b) del inciso primero del artículo 27 bis de la ley 20.129 y en el literal iv del inciso segundo del artículo trigésimo sexto transitorio de la ley 20.903.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


JOSÉ MIGUEL SALAZAR ZEGERS
SUPERINTENDENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR




MRM/DMA/ASA

Distribución:

- Subsecretario de Educación Superior	1c
- Fiscalía	1c
- Gabinete	1c
- Partes y Archivo	1c
- Total	4c

Expediente MGD: 2023-01392



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2589951-9247e9 en:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/>